



Cámara Federal de Casación Penal

Registro Nro.: 1685/2024

///la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, se reúnen los señores jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal doctores Carlos A. Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Antonio Petrone, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Secretario Actuante, para resolver en la causa **CFP 9539/2014/TO1/CFC2** del registro de esta Sala, caratulada: "**C [REDACTED], Andrés y otros s/recurso de casación**". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; en tanto que los doctores Lucio S [REDACTED] y Norberto Federico F [REDACTED] asisten técnicamente a Andrés C [REDACTED].

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Javier Carbajo, Daniel Antonio Petrone y Carlos Alberto Mahiques.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez **Javier Carbajo** dijo:

PRIMERO:

1. Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de esta ciudad, en cuanto dispuso: "**I. HACER LUGAR** a la solicitud de reparación económica efectuada por el imputado Andrés C [REDACTED], junto a su defensa particular. **II. FIRME QUE SEA** el presente decisorio, el imputado



C[REDACTED] deberá **ABONAR**, en el plazo de 10 días hábiles, la suma de veintiún mil cincuenta dólares estadounidenses, con noventa y dos centavos de dólar (u\$ 21.050,92), al tipo de cambio en pesos argentinos que corresponda a la fecha en que el presente adquiera estado de firmeza, a favor de la Unidad de Información Financiera, en la cuenta que esa dependencia deberá informar en el plazo de 10 días. **III. DISPONER**, en caso en que sea cumplida la obligación aludida en el punto anterior, la **EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL** y, en consecuencia, el **SOBRESEIMIENTO** de Andrés C[REDACTED]...".

2. La impugnación fue concedida por el *a quo* y mantenida en esta instancia.

3. Descripción de los agravios.

Tras reseñar lo actuado en el legajo, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que al homologar el acuerdo de reparación integral, el *a quo* incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez que la extinción de la acción penal por dicha causal no resulta aplicable con oposición fiscal debidamente fundada.

Especificó que en el caso se desnaturalizó el instituto y se privó al Ministerio Público Fiscal de facultades, prerrogativas, funciones y deberes que la Constitución Nacional, la ley orgánica y el Código Procesal Penal Federal le confiere a esa parte.

Aludió a los diversos compromisos internacionales asumidos por el país en la materia y que tienen como propósito luchar y combatir el blanqueo de dinero.

Aclaró que la UIF no es parte querellante en este caso y que su opinión o silencio no tiene ninguna relevancia.

Explicó que el dictamen fiscal es vinculante, si supera el análisis de logicidad y razonabilidad. Asimismo, añadió que al





Cámara Federal de Casación Penal

resolver de manera contraria a lo propiciado por el titular de la acción pública, implica una intromisión en las funciones que son propias del Ministerio Público Fiscal.

Concluyó que el juez resolvió desoyendo la normativa internacional en la materia y la oposición fiscal debidamente fundamentada en cuestiones de política criminal y disposiciones aplicables; resultando a su criterio manifiesta la arbitrariedad de la resolución, al disponer de la acción sin tener en cuenta el desacuerdo del único órgano legitimado para ejercerla.

En otro orden de ideas, explicó que el monto lavado que toma por cierto el juez se encuentra cuestionado por esa parte.

Profundizó sobre el punto, señalando que *"con el dictado de esta resolución no solo perjudica los intereses económicos del Estado, al ser el monto notoriamente inferior al que surge del requerimiento de elevación a juicio, sino que, además, acarrea como consecuencia el sobreseimiento del imputado. Es decir, con esta resolución la reparación del daño no se encuentra cubierta en su totalidad, el reproche penal a C[REDACTED] se encuentra desvirtuado, quien a su vez se ve beneficiado al blanquear un inmueble muy valioso, el cual eventualmente podría ser objeto de decomiso"*.

En suma, solicitó se case la resolución recurrida y, en consecuencia, se deje sin efecto la reparación integral concedida a C[REDACTED], haciendo reserva del caso federal.

4. En la oportunidad prevista por el art. 466 del C.P.P.N., únicamente se presentó el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, quien por los motivos que expuso, solicitó se haga



lugar al recurso de casación y se revoque la resolución impugnada.

5. Superada la etapa prevista en el artículo 468 del CPPN (oportunidad en la que la defensa de Andrés C. [REDACTED] presentó breves notas, requiriendo que se rechace la impugnación de la Fiscalía), las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

SEGUNDO:

I. El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal resulta formalmente admisible, habida cuenta que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte se encuentra habilitada para impugnarla (arts. 458 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.

II. Superado ello, habré de efectuar un somero repaso de lo actuado en la encuesta.

En la audiencia celebrada al efecto, la defensa de C. [REDACTED] solicitó la extinción de la acción penal con respecto a su asistido en los términos del art. 59 -inc. 6°- del Código Penal y 22 del C.P.P.F, ofreciendo como reparación del daño, en forma de donación a una entidad de bien público, la suma de veintiún mil cincuenta dólares, con noventa y dos centavos (U\$S 21.050,92), en el entendimiento de que dicha suma guardaba relación directa con el monto de dinero que no se había podido determinar pericialmente como justificable por parte de C. [REDACTED], a pagar en pesos y a la cotización del día que se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

En esa ocasión, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó su oposición a la propuesta de la contraparte.





Cámara Federal de Casación Penal

Posteriormente, y atento lo dispuesto por el art. 27 de la ley 25.246, se corrió traslado a la Unidad de Información Financiera, organismo que no efectuó presentación alguna.

Llegado el momento de resolver, el magistrado interviniente hizo lugar a la reparación económica ofrecida por el imputado C [REDACTED].

Para así decidir, en primer lugar recordó que a partir del requerimiento de elevación a juicio formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal se le atribuyó a Andrés C [REDACTED] *"el haber adquirido, con el objeto de canalizar y poner en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, el inmueble ubicado en la calle B [REDACTED] 1651, UF 383/UF 89.19 de Vicente López-PBA (nomenclatura catastral: C:II S:F M:64 P:9 SP:383) comprado por el deponente con fecha 30/8/2011, inscripción registral a su respecto. Ello, conforme escritura compraventa n° 104 del 30/8/2011 Escribana Carolina M [REDACTED] al f° 1056 [S/Cert. 984509/0 del 15/8/2011 (UF ET), S/Cert. 984516/1 del 15/8/2011 (UF 383) y S/Cert. 984515/7 del 15/8/2011 (UF 89). El precio total abonado: U\$S 421.988,46 (incluye el IVA) que fue cotizado a \$ 4.21 -por dólar al día de la operación 30/8/2011- por lo que se pagó \$ 1.776.571.42. La forma de pago: transferencia bancaria en las cuentas corrientes en pesos y dólares del Banco Santander Río pertenecientes a la firma R [REDACTED] SA [CUIT 30-[REDACTED]07-0] El deponente el mismo día -30/8/2011 - constituyó "Bien de Familia" por el inmueble adquirido junto con su cónyuge María Betania D [REDACTED] (DNI N° [REDACTED]5)"; encuadrándose su conducta en la*



figura del delito de lavado de activos, en calidad de autor (arts. 45 y 303 -inciso 1º- del C.P.).

Tras ello, se hizo alusión a las normas que rigen la materia y se concluyó que debía *“analizarse con la mayor amplitud posible toda salida alternativa a la judicialización, de forma tal que se logre un acabado cumplimiento a nuestro futuro ordenamiento adjetivo, conforme la norma prevista en el art. 22 del C.P.P.F. que dispone a los jueces y los representantes de la ‘vindicta pública’ a procurar solucionar el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”*.

En ese orden, se dijo que *“la conciliación y la reparación del perjuicio han quedado claramente incluidas y receptadas por nuestro C.P. -Ley n° 27.147- como causales de extinción de la acción penal y, en el plano adjetivo, resultan tratadas como motivos de sobreseimiento, conforme lo dispuesto por [el] ordenamiento procesal receptado por la Ley n° 27.063...”*.

A mayor abundamiento, se señaló que no se trata de un criterio de oportunidad que se reserve pura y exclusivamente a la decisión fiscal.

Así pues, *“a partir de la voluntad reparadora del imputado y teniendo en consideración que el rol de la presunta víctima en estas actuaciones se encuentra en cabeza de la Unidad de Información Financiera por tener la competencia en materia preventiva y sancionatoria de la figura del lavado de activos, se le dio intervención para que se expida acerca de la propuesta efectuada por la defensa y, sobre la cuestión, nada ha manifestado”*.

Sobre este aspecto, se ponderó que *“el Estado no*





Cámara Federal de Casación Penal

puede desoír la voz de la parte damnificada a efectos de superar el conflicto, pero tampoco puede ante su silencio, entenderlo en perjuicio del imputado, máxime si se considera que tal es la relevancia que tiene la Unidad de Información Financiera en un caso como el que nos ocupa. Ello, aunado a que, el monto dinerario ofrecido en concepto de reparación, tiene como destino final, porque la norma así lo exige, que sea depositado a favor de ese organismo".

Y se concluyó que "el silencio que aquí se ha evidenciado, (...) debe ser entendido como un consentimiento, ante la pretensión de la defensa".

Continuando con el análisis, se especificó que "la propuesta reparatoria formulada por la defensa fue enmarcada en el art. 56 -inc. 6º- del C.P. que estipula el instituto de la reparación integral del perjuicio, el cual, de acuerdo a lo sostenido por la Sala IV de la C.F.C.P., se encuentra plenamente operativo pese a la carencia de normas reglamentarias sobre su implementación".

Se agregó que el nuevo Código Procesal Penal Federal si bien ha regulado el instituto de la conciliación como un acuerdo entre partes a ser homologado por el juez -lo que no ocurre en el caso-, lo cierto es que nada se dispuso con relación a la reparación integral. En concreto, se precisó que "puede vislumbrarse en la redacción del art. 59 -inc. 6º- del C.P. la utilización de la conjunción disyuntiva "o", por lo que nos encontramos en presencia de dos institutos que pueden diferenciarse pese a compartir la misma intención final, es decir, la de encontrar una solución alternativa al conflicto penal".



En otro orden de ideas, se tuvo en cuenta que los hechos que se le atribuyen al imputado habrían sido cometidos hace más de 13 años y que la sustanciación de la causa también ha insumido casi 10 años, ya que se inició con fecha 25/9/2014.

Se consideró asimismo la carencia de antecedentes penales computables del imputado C [REDACTED], sus circunstancias personales, particularmente en orden a su edad, a que tiene ingresos lícitos y a que ha constituido y desarrollado una familia y tiene un proyecto de vida. Además, se valoró que la otra persona que se encontraba vinculada a estas actuaciones, ha fallecido sin una resolución que le ponga fin al proceso.

En torno al ofrecimiento de reparación integral efectuado, se lo juzgó *“apropiado, pues resulta fundado, razonado y procedente y comprende la suma de veintiún mil cincuenta dólares con noventa y dos centavos (U\$S 21.050,92) que refiere, ni más ni menos que a la cantidad de dinero que no se habría logrado determinar pericialmente como justificable por parte del imputado C [REDACTED]”*.

Y se señaló que *“si bien el Sr. Fiscal General discrepó con las conclusiones de los peritos intervinientes, lo cierto es que, debe recordarse que en ninguna ocasión formularon observaciones que evidencien la imposibilidad de llevar a cabo el peritaje tal como fue realizado y luego incorporado al debate a pedido del Sr. Fiscal General”*.

Finalmente, se indicó que *“los fundamentos de la oposición de la parte acusadora no resultan suficientes, en este caso específico, para demostrar que la solución propuesta por la defensa de Andrés C [REDACTED] no resulte la más adecuada, justa y razonable ante las particulares características de la situación que ya fueron destacadas y valoradas”*.





Cámara Federal de Casación Penal

III. En mis votos en las causas CFP 14958/2017/CFC1 "Castiñeiras, Patricia Mariana s/recurso de casación", Reg. 2106/20 del 23/10/2020 y FPA 851/2020/TO1/CFC1 "Toller, Darío J. s/rec. de casación", Reg. 643, del 11/6/2024, ambas de la Sala IV y en donde se discutía la aplicación de este instituto a instancias del imputado, ya he tenido oportunidad de señalar que *"...el fiscal debe ser oído y emitir opinión en punto a la satisfacción de los intereses públicos involucrados en el conflicto penal, más aún en los casos de afectación de bienes supraindividuales"* y que, ya sea que se trate de una conciliación o de una reparación integral, *"... el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción pública, ejerce un rol primordial que no puede ser ignorado y que demanda su activa participación en el devenir de la cuestión a decidir"*.

En estos institutos -que se encarnan en el nuevo paradigma de justicia restaurativa-, a la par de oír al acusador, se debe escuchar también al particular damnificado y/o víctima del comportamiento pesquisado en audiencia oral, pública y contradictoria, y debe propenderse no sólo a la búsqueda de soluciones alternativas al conflicto subyacente en el suceso delictivo que se trate sino, por sobre todo, a procurar el resguardo de los intereses generales que se vean afectados en la comisión del delito, intentando alcanzar la reparación del daño, la reconciliación de las partes, el reforzamiento de los vínculos y la paz social.

En el caso que nos ocupa y como se detalló, el representante del Ministerio Público Fiscal, se opuso a la procedencia del instituto.



No solo eso, sino que además sostuvo que “la suma ofrecida resulta muy inferior al monto por el que C[REDACTED] fue imputado y requerido a juicio, esto es U\$S 421.988,46” y que el “... que pretende utilizar la defensa no fue compartido por la totalidad de los peritos intervinientes e incluso fue cuestionado por [ese] Ministerio Público Fiscal”.

En efecto, en ocasión de celebrarse la audiencia pertinente y conforme surge del acta respectiva, indicó que el rol de esa parte distaba de ser de un mero órgano de contralor, pues en el caso la víctima del delito era la sociedad en su conjunto, al afectarse el orden económico y financiero que las normas nacionales e internacionales de lavado de activos persiguen.

Agregó que “el legislador estableció rígidos parámetros dentro de los cuales veda a [ese] M.P.F. de arribar a un acuerdo conciliatorio si el delito resulta incompatible con las previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones criminales de política criminal enunciadas por la Procuración General de la Nación conforme el art. 30 del C.P.P.F. Entonces, aquí al verse afectados bienes jurídicos supra individuales que perturban al orden económico financiero, el orden público y la seguridad interior, no hay dudas de que esta parte representa los intereses generales de la sociedad, conforme la manda constitucional del artículo 120”.

Precisó que “prestar la conformidad en un caso como el presente en donde se investiga el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción ligados a coimas en el fútbol internacional, cuyo dinero ingresó primero a una cuenta en Suiza de D[REDACTED] para luego transferirse a una cuenta suiza en las cuales D[REDACTED] y C[REDACTED] eran co-titulares y últimos beneficiarios, implicaría transgredir la normativa internacional a la que se encuentra obligado el Estado Argentino con su consecuente responsabilidad internacional. A su





Cámara Federal de Casación Penal

vez, cuestiones de política criminal establecidas en la instrucción general impartida mediante Resolución Procuración General de la Nación n° 92/2023 [lo] obliga a oponer[se] a cualquier acuerdo que desconozca los mandatos normativos y reglamentarios derivados de las obligaciones que la República Argentina ha asumido..."

Pues bien, el abordaje que ha hecho el *a quo* del caso traído a su estudio ha desatendido estos extremos y argumentos - por demás fundados- arrimados por la acusación oficial para oponerse al instituto pretendido.

Ciertamente, se verifican en el caso diversas cuestiones que desaconsejan la vía escogida y evidencian la necesidad de continuar con el trámite del proceso hacia la realización del juicio oral, siendo este, incluso, el ámbito adecuado para que se diluciden las distintas cuestiones controvertidas que aún persisten y que se han puesto de manifiesto, esencialmente, en el requerimiento de elevación a juicio presentado por esa parte.

Las especiales características y gravedad del suceso en ciernes, los diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados a la investigación, prevención y juzgamiento de delitos de lavado de activos, así como también y fundamentalmente, la discrepancia puesta de manifiesto por la acusación en torno al monto de dinero presuntamente blanqueado, resultan elementos dirimientes que revelan el desacierto de lo decidido en la especie.

Tal como lo resalta con énfasis el señor Fiscal General ante este Cuerpo Raúl Omar Pleé en su presentación de días de oficina, en el caso se investigan graves hechos de lavado de activos



que provendrían de la apropiación ilegal de fondos de una Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) y la recepción de sobornos; circunstancia también desatendida por el tribunal de grado, *“aspecto que se ve intensificado en casos de la gravedad como el presente, signado por su prolongación temporal; el carácter internacional; la actuación mancomunada de sus intervinientes y el particular tenor de los [ilícitos] precedentes”* (cfr. Lex 100).

En dicha presentación destacó que *“[e]n el desarrollo de la investigación se detectó la existencia de cuentas bancarias en la Confederación Suiza en las que D [REDACTED] -coimputado en este proceso respecto de quien se extinguió la acción penal a raíz de su fallecimiento- y C [REDACTED] habrían depositado los activos ilícitos provenientes de la apropiación ilegal de fondos de la CONMEBOL y la recepción de sobornos, que luego habrían aplicado a las adquisiciones de inmuebles objetadas en la causa con el fin de darles apariencia de licitud”*.

“Así se tomó conocimiento de la cuenta nro. 0835-576279-5 abierta por D [REDACTED] el 29 de marzo de 2004 en la sede central del Banco Credit Suisse AG Zurich (en adelante, Credit Suisse), de la que resultó ser su titular y beneficiario final. En esa cuenta, entre los años 2004 y 2008, fluyeron varios importes provenientes de las actividades ilícitas por un total aproximado de U\$S 1,8 millones. Fue cerrada el 25 de noviembre de 2009 y sus fondos transferidos a la cuenta n° 0835- [REDACTED] 3 del Credit Suisse abierta poco antes a nombre de D [REDACTED] y C [REDACTED], ambos en calidad de titulares y beneficiarios finales”.

“En lo que aquí nos interesa, cabe mencionar que, de la documentación bancaria aportada, el Credit Suisse informó créditos en la cuenta n° 0835-[REDACTED]-5 de titularidad de D [REDACTED],





Cámara Federal de Casación Penal

provenientes de sociedades radicadas en el extranjero, entre ellas, 'V[REDACTED] Corp.' y 'S[REDACTED] LTD', constituidas en Panamá e Islas Turks and Caicos respectivamente (fs. 1311/1325), jurisdicciones caracterizadas por su alta opacidad fiscal".

"Estas sociedades habrían sido utilizadas por la firma T[REDACTED] Traffic Sports Marketing LTD (T&T) como intermediarias para el pago de sobornos a dirigentes de la CONMEBOL a través de las entidades financieras norteamericanas National Delta Bank, Banco Do Brasil y Standart Chartered, todas con sede en la ciudad de New York de los Estados Unidos de Norte América".

"Estos hechos, que resultan ser precedentes del lavado de activos investigado en esta causa, son objeto de persecución penal en la causa UNITED STATES OF AMERICA vs. JEFFREY W[REDACTED], ET. AL, 15 -CR-00252 (PKC), en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia (United States District Court) del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, en la que se acusa a Jeffrey W[REDACTED], Eduardo F[REDACTED], Rafael E[REDACTED], José María M[REDACTED], Nicolás L[REDACTED], Alejandro B[REDACTED], Aaron D[REDACTED], Hugo J[REDACTED], Mariano J[REDACTED], José M[REDACTED], entre otros, y en la que se menciona la vinculación de los nombrados con Eduardo D[REDACTED] en su carácter de Secretario General de la CONMEBOL (fs. 531/605)".

Repárese que en otra pieza procesal trascendente de la causa y por la cual la vindicta pública también revela su afán persecutorio, se sostuvo que la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó, en su momento, que el perfil impositivo de C[REDACTED] "... no concuerda[n] con los montos millonarios depositados en el exterior, ni con las adquisiciones efectuadas, dando el indicio que



el origen de esos fondos estaría vinculado a alguna actividad delictiva. A su vez la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concluyó que de las Declaraciones Juradas de Impuestos de C [REDACTED] (ganancias y bienes persona[le]s) se observa que en los períodos fiscales 2004 al 2010, no declaró bienes en el exterior” - sic del requerimiento de elevación a juicio en la presente causa, disponible en Lex 100, foliado a fs. 2933 y ss.).

Debe tenerse presente, por lo demás, que en esta clase de delitos como los que aquí se deben juzgar, dónde se llevan adelante conductas complejas alternativas respecto de actividades económicas lícitas, se procura focalizar, a través de los respectivos órganos del Estado, los esfuerzos en la recuperación de los bienes que, en principio, se habrían obtenido con el producido de ese accionar ilícito.

Y así considero necesario señalarlo pues la objeción puesta de manifiesto por el acusador, en cuanto a que el monto económico ofrecido por la parte resulta sumamente inferior al reciclado en la presunta operatoria ilegal de blanqueo de dinero por el cual C [REDACTED] fuera imputado y requerido a juicio -extremo controvertido por la defensa a estar a las breves notas presentadas sustitutivas de la audiencia en Casación-, cobra singular valor en la especie, convirtiéndose, sin duda alguna, en un elemento decisivo desoído en el pronunciamiento impugnado.

Al respecto, cabe recordar que el objeto procesal en autos constituye un supuesto que encuadra en el denominado fenómeno de criminalidad organizada trasnacional y que el Estado argentino es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (ley 25.632), instrumento que, en lo que aquí concierne, prevé al lavado de activos (o blanqueo de dinero según la terminología allí empleada).





Cámara Federal de Casación Penal

Frente a supuestos en donde se comprueben estas acciones e interpretando el fenómeno en términos de coste de oportunidad, el sujeto que actúe guiado por el ánimo de lucro de ese modo, optará por enfrentarse de cualquier manera, aun en forma alternativa, a la ley penal, en tanto -y esta no es una regla que necesariamente aplique al caso- podrá estimar que las consecuencias negativas que de ello pueden derivarse siempre serán inferiores al beneficio esperado.

En esa línea de pensamiento se inscribe la mayoría de la doctrina internacional sobre esta materia, haciendo foco en que el lavado de dinero pone en peligro ante todo la libre competencia sobre la que se basa el actual sistema de economía de libre mercado, afectando la solidez y la estabilidad del sistema financiero, sin olvidar que, de la propia caracterización colectiva del bien jurídico protegido en el art. 303, inc. 1, del Cód. Penal por el que viene acusado Andrés C [REDACTED], en calidad de autor, se desprende la idea de que el sujeto pasivo del delito en cuestión es la comunidad en general (cfr., entre otros, Caparrós, F. *El delito de blanqueo de capitales*, Ed. Colex, 1998, Madrid, España, p. 69 y Martínez Buján Pérez, C. *Derecho Penal Económico, parte especial*, Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1999, p. 296 y ss., citados en mi voto CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 "Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación", Reg. 125/23 de la Sala IV, del 28/2/2023).

Por los motivos expuestos, y en las particulares circunstancias del caso, propicio en definitiva al Acuerdo: **HACER LUGAR** al recurso de casación deducido por el representante del



Ministerio Público Fiscal, sin costas, **CASAR** la resolución impugnada, **RECHAZAR** la reparación económica efectuada, y **REMITIR** las actuaciones al tribunal de procedencia para que se prosiga, con la debida celeridad, con el trámite de la causa conforme a lo aquí resuelto (arts. 456, inc. 1, 470, 530 y cc. del CPPN).

Así voto.

El señor juez **Daniel Antonio Petrone** dijo:

Ciertamente, deviene aplicable en la encuesta los precedentes “Loyola, Verónica s/ rec. de casación” (causa FCR 32003281/2010/TO1/CFC2, registro n° 1032/20 del 14/08/2020) y “Marinelli, Juan Cruz s/recurso de casación” (causa FMZ 13759/2016/TO1, registros n° 737/2022 y 872/23 del 22/06/2022 y 10/08/2023, respectivamente) de la Sala I, así como también “Parolari, Osvaldo Fabián s/ rec. de casación” (Expte. CFP 17459/2018/TO1/43/CFC18, registro n° 432/23, del 17/05/2023) de esta Sala III, donde sostuve que, en tanto la regulación del acuerdo conciliatorio se enmarca en la Sección 2° del Capítulo 1, Título II, Libro Primero, Primera Parte del CPPF, en la que se establecen las reglas de disponibilidad por las cuales se autoriza al representante del Ministerio Público Fiscal, a modo de excepción al principio de legalidad, a prescindir del ejercicio de la acción penal pública ante la posible comisión de un delito, su expresa oposición a la extinción de la acción por conciliación impone al juez una acabada valoración al respecto, debiendo pronunciarse acerca de la legalidad y razonabilidad de tal dictamen.

Si bien el primero de los precedentes citados se refiere a un caso de conciliación, el razonamiento allí expuesto resulta aplicable *mutatis mutandi* a la situación aquí planteada, pues la extinción por reparación integral del perjuicio supone disponer de





Cámara Federal de Casación Penal

la acción penal pública, cuya promoción, por mandato constitucional se ha reservado al Ministerio Público Fiscal (cfr. art. 120, C.N.).

Desde ese prisma, en el particular, el *a quo* no realizó el correspondiente control de razonabilidad y fundamentación del dictamen efectuado por su representante, lo cual denota un vacío argumental en torno a cuestiones conducentes para una adecuada resolución del caso y, por ende, un análisis parcializado de la cuestión, circunstancia que lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

Así las cosas, habré de propiciar al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el MPF, sin costas; anular la resolución recurrida y remitir la causa al tribunal de origen a fin de que se emita un nuevo fallo de acuerdo con los lineamientos expuestos precedentemente.

Así voto.

El señor juez doctor **Carlos A. Mahiques** dijo:

Comparto, en lo sustancial, las consideraciones expuestas en el voto del colega que lidera el acuerdo, vinculadas a la ausencia de un debido abordaje por parte del tribunal *a quo* del dictamen negativo emitido por el representante del Ministerio Público Fiscal; ello de conformidad con lo resuelto en los precedentes *Torres* (causa nro. FSM 2518/2017/117/1/CFC1, reg. nro. 966/21 de la Sala II, rta. el 15 de junio de 2021) y *Marinelli* (causa nro. FMZ 13759/2016/TO1/CFC2, reg. nro. 872/23 de la Sala I, rta. el 1 de agosto de 2023). En consecuencia, adhiero a la solución allí propuesta.



Tal es mi voto.

En mérito del resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal **RESUELVE**:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas, y por mayoría, **CASAR** la resolución impugnada, **RECHAZAR** la reparación económica efectuada, y **REMITIR** las actuaciones al tribunal de procedencia para que se prosiga, con la debida celeridad, con el trámite de la causa conforme a lo aquí resuelto (arts. 456, inc. 1, 470, 530 y cc. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada nº 5/2019 de la CSJN), y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

